



TRIBUNAL ELECTORAL  
del Poder Judicial de la Federación

## JUICIOS ELECTORALES

**EXPEDIENTES:** SM-JE-64/2020 Y SU  
ACUMULADO SM-JE-65/2020

**ACTORES:** **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL.** Ver fundamento y motivación al final de la sentencia

**RESPONSABLE:** TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

**MAGISTRADO PONENTE:** ERNESTO CAMACHO OCHOA

**MAGISTRADA ENCARGADA DEL ENGROSE:** CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO

**SECRETARIADO:** MARÍA GUADALUPE VÁZQUEZ OROZCO Y CELEDONIO FLORES CEACA

Monterrey, Nuevo León, a seis de noviembre de dos mil veinte.

**Sentencia definitiva** que **modifica** la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro en el juicio ciudadano **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL.** Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, al estimarse que: **a)** son ineficaces los agravios expresados por los actores para cuestionar la ilegalidad de la imposición de una medida de apremio, por haber quedado firme su justificación o necesidad para hacer cumplir las determinaciones del órgano jurisdiccional; **b)** no se vulneró el principio de reformar en perjuicio porque, ante la actitud contumaz de cumplimiento de determinaciones judiciales, procedía imponer el arresto para disuadir a los inconformes de continuar realizando actos que obstaculicen el ejercicio del cargo del funcionariado municipal; y **c)** se debió justificar por qué se impuso el plazo máximo de treinta y seis horas que la Ley prevé para el arresto.

## ÍNDICE

GLOSARIO .....	2
1. ANTECEDENTES DEL CASO .....	2
2. COMPETENCIA .....	5
3. ACUMULACIÓN .....	5
4. PROCEDENCIA .....	5
5. CUESTIÓN PREVIA .....	7
6. ESTUDIO DE FONDO .....	8
6.1. Materia de la controversia .....	8
6.1.1. Sentencia impugnada .....	8
6.1.2. Planteamiento ante esta Sala .....	10
6.2. Cuestión a resolver .....	11
6.3. Decisión .....	12
6.4. Justificación .....	13

6.4.1. Son ineficaces los agravios hechos valer para cuestionar la ilegalidad de la imposición de una medida de apremio, al haber quedado firme su justificación o necesidad para hacer cumplir las determinaciones emitidas por el Tribunal local ..... 13

6.4.2. No se vulnera el principio de non reformatio in peius o de no reformar en perjuicio, porque ante la actitud contumaz del cumplimiento de determinaciones judiciales, procedía imponer una medida de apremio que resultara idónea y eficaz, descartándose las que previamente no lograron un efecto disuasivo y aquella que se reclamó como inconstitucional..... 15

6.4.3. El Tribunal local debió justificar por qué determinó procedente imponer el plazo máximo de treinta y seis horas que la Ley de Medios Local prevé para el arresto..... 20

7. RESOLUTIVOS ..... 22

**GLOSARIO**

<b>Ayuntamiento:</b>	Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, Querétaro
<b>Código de Procedimientos:</b>	Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro
<b>Constitución Federal:</b>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<b>Ley de Medios:</b>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
<b>Ley de Medios Local:</b>	Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro
<b>Regidora:</b>	<b>ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL.</b> Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, regidora del Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, Querétaro
<b>Tribunal local:</b>	Tribunal Electoral del Estado de Querétaro

2

**1. ANTECEDENTES DEL CASO**

Las fechas que se citan corresponden a dos mil veinte, salvo distinta precisión.

**1.1. Toma de protesta.** El primero de octubre de dos mil dieciocho, **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL.** Ver fundamento y motivación al final de la sentencia tomó protesta como regidora del *Ayuntamiento*.

**1.2. Solicitudes de información.** El cuatro de marzo, quince y dieciséis de agosto, así como veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, la *Regidora* presentó diversas peticiones a integrantes del *Ayuntamiento*, a fin de que se le entregara información y documentación relativa a la gestión municipal.

**1.3. Respuesta a las solicitudes.** Mediante tres oficios de la Presidencia Municipal y la Sección Administrativa(*sic*), se dio respuesta a las solicitudes



que la *Regidora* presentó el quince y dieciséis de agosto de dos mil diecinueve.

**1.4. Demandas locales.** El doce de septiembre y el veinticinco de octubre del dos mil diecinueve, respectivamente, la *Regidora* promovió ante el *Tribunal local* los juicios ciudadanos **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL**. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia; en el primero controvertió, entre otras cuestiones, las respuestas dadas a sus solicitudes; y en el segundo, argumentó que diversos funcionarios habían sido omisos en dar respuesta a sus peticiones de cuatro de marzo y veinticuatro de septiembre de ese año.

**1.5. Primera sentencia local.** El dieciséis de diciembre posterior, el *Tribunal local* resolvió en forma acumulada los medios de impugnación. Desechó el juicio local **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL**. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia; asimismo, declaró la existencia de violencia política en perjuicio de la *Regidora*, imponiendo diversas sanciones a los actores y ordenó la entrega de la información solicitada el quince de agosto.

**1.6. Juicios federales.** Inconforme con la resolución local, el veinte de diciembre del dos mil diecinueve y el ocho de enero, la *Regidora* y los actores promovieron, en su orden, los juicios **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL**. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia.

Por sentencia dictada el treinta de enero, esta Sala dejó sin efectos el desechamiento decretado y ordenó emitir, en plenitud de jurisdicción, nueva determinación.

**1.7. Primera sentencia local en cumplimiento.** El veinte de febrero, el *Tribunal local* emitió sentencia en cumplimiento a la diversa emitida por esta Sala.

**1.8. Incidente.** Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero, la *Regidora* promovió incidente de incumplimiento de la sentencia dictada por esta Sala.

En la resolución incidental dictada el once de marzo, este órgano jurisdiccional lo **declaró** fundado, toda vez que el *Tribunal local* no acató lo

ordenado en la ejecutoria de treinta de enero y le instruyó que diera cumplimiento, conforme a los lineamientos establecidos para ello.

**1.9. Cumplimiento de la resolución incidental** [ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia].

El dieciocho de marzo, el *Tribunal local* dictó sentencia en la que declaró la obstaculización del cargo de la *Regidora*, derivado de las omisiones de los funcionarios municipales de dar respuesta a sus solicitudes, dilaciones injustificadas o negativas, e impuso multas a los actores.

**1.10. Juicios electorales federales.** El uno de junio, los actores, en su carácter de entonces [ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia] del Ayuntamiento y de [ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia], promovieron, en su orden, los juicios electorales [ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia].

Por sentencia dictada el quince de octubre, esta Sala modificó la resolución impugnada y dejó sin efectos la multa impuesta.

4

**1.11. Segunda sentencia dictada en cumplimiento [acto impugnado].** El veintitrés de octubre, el *Tribunal local* dictó resolución, en cumplimiento a lo ordenado por esta Sala, y determinó imponer a los actores arresto por treinta y seis horas.

**1.12. Juicios electorales.** El veintinueve de octubre, [ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia]—entonces [ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia] del *Ayuntamiento*— y [ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia]— [ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia]— promovieron, en su orden, los juicios electorales SM-JE-64/2020 y SM-JE-65/2020 que se resuelven.

**1.13. Sesión pública de resolución y engrose.** En sesión pública de esta fecha, el proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno por la magistratura ponente fue rechazado por mayoría de votos, por lo que se instruyó el engrose conforme al turno establecido para ese efecto.



## 2. COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los presentes asuntos, porque se trata de juicios electorales en los que se controvierte una sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, entidad federativa que se ubica en la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal en la que se ejerce jurisdicción y que versa sobre la revisión de legalidad de la imposición de una medida de apremio.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 195, fracción XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Lineamientos Generales para la Identificación e Integración de Expedientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación<sup>1</sup>.

## 3. ACUMULACIÓN

Del análisis de las demandas se advierte que existe identidad en la autoridad responsable y en la resolución que se impugna, y se tienen idénticas pretensiones, por tanto, los juicios tienen conexidad.

Así, a fin de eliminar el riesgo de pronunciar sentencias contradictorias, procede acumular el expediente SM-JE-65/2020 al diverso SM-JE-64/2020, por ser el primero en recibirse, debiendo agregar copia certificada de los puntos resolutiveos de esta sentencia a los autos del expediente acumulado.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la *Ley de Medios* y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

## 4. PROCEDENCIA

Los juicios electorales son procedentes, al reunir los requisitos previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, y 13, de la *Ley de Medios*, conforme a lo razonado en el auto de admisión.

---

<sup>1</sup> Aprobados el doce de noviembre de dos mil catorce, en los que, a fin de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva y no dejar en estado de indefensión a los gobernados cuando un acto o resolución en materia electoral no admita ser controvertido a través de un medio de impugnación previsto en la *Ley de Medios*, se determinó la integración de expedientes denominados Juicios Electorales, para conocer los planteamientos respectivos, los cuales deben tramitarse en términos de las reglas generales previstas para los medios impugnativos que establece la legislación procesal electoral.

No obstante, en cuanto al requisito procesal de **legitimación**, es preciso puntualizar las razones por las cuales se tiene por satisfecho.

La legitimación puede y debe considerarse desde dos vertientes: frente a la causa y frente al proceso. La **legitimación en la causa** se refiere al requisito necesario para obtener un fallo favorable, mientras que la segunda, la **legitimación al proceso**, es un presupuesto procesal necesario para promover válidamente algún medio de impugnación.

En ese sentido, si atendemos a la legitimación procesal activa, tenemos que esta consiste en la aptitud o circunstancia especial que la ley otorga a una persona para ser parte, en calidad de demandante, en un juicio o proceso determinado, la cual deriva de la existencia de un derecho sustantivo atribuible al sujeto que acude, por sí mismo o por conducto de su representante, ante el órgano jurisdiccional competente, a exigir la satisfacción de una pretensión<sup>2</sup>.

6

En cuanto al tema jurídico que nos atañe, es criterio de este Tribunal Electoral<sup>3</sup> que, cuando una autoridad federal, estatal o municipal participó en una relación jurídico procesal como sujeto pasivo, demandado o autoridad responsable, de conformidad con el sistema de medios de impugnación federal, carece de legitimación activa para promover los juicios, porque estos únicamente tienen como supuesto normativo de esa legitimación a las autoridades cuando hayan concurrido con la calidad de demandantes o terceros interesados, en la relación jurídico procesal primigenia, en apego a la jurisprudencia de rubro: LEGITIMACIÓN ACTIVA. LAS AUTORIDADES QUE ACTUARON COMO RESPONSABLES ANTE LA INSTANCIA JURISDICCIONAL ELECTORAL LOCAL, CARECEN DE ELLA PARA PROMOVER JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL<sup>4</sup>.

La Sala Superior también ha reconocido que existen **casos de excepción**, en los cuales la resolución o el acto impugnado causa una **afectación en detrimento de los intereses, derechos o atribuciones de la persona que funge o actúa en calidad de autoridad responsable**, ya sea porque se estime que se le priva de alguna prerrogativa o bien se le imponga una carga a título personal, evento en el cual se ha considerado que sí cuenta con

---

<sup>2</sup> Así lo sostuvo la Sala Superior al resolver el juicio SUP-JDC-1158/2019 y acumulado, así como el diverso SUP-JE-103/2019.

<sup>3</sup> Véase lo resuelto en los juicios electorales SM-JE-55/2019 y SM-JE-01/2017, entre otros.

<sup>4</sup> Jurisprudencia 4/2013, publicada en: *Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral*, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 6, número 12, 2013, pp. 15 y 16.



legitimación para recurrir el acto que le agravia, en tanto se genera la necesidad de salvaguardar el principio de tutela judicial efectiva o acceso pleno a la jurisdicción, ante el interés de la persona física para defender su derecho, conforme a la jurisprudencia de rubro: LEGITIMACIÓN. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, POR EXCEPCIÓN, CUENTAN CON ELLA PARA IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES QUE AFECTEN SU ÁMBITO INDIVIDUAL<sup>5</sup>.

En el caso, los actores tienen legitimación para controvertir la sentencia local, toda vez que, aun cuando fungieron como autoridades responsables en esa instancia, se les impuso una medida de apremio, por lo que **la resolución impugnada incide en su esfera individual**, actualizándose el supuesto de excepción previsto en la jurisprudencia.

## 5. CUESTIÓN PREVIA

Los actores solicitan en sus demandas que esta Sala suspenda la ejecución de la resolución que reclaman, es decir, que no se lleve a cabo el arresto, a fin de evitar que la violación alegada sea irreparable y los presentes juicios queden sin materia.

Su petición es **improcedente** porque, a diferencia de lo que puede ocurrir en otras materias, como el amparo, la suspensión no está prevista como viable en la materia de nuestra competencia; los actos reclamados no son suspendibles.

Conclusión que encuentra sustento en el artículo 41, fracción VI, párrafo segundo, de la *Constitución Federal* que expresamente prevé que la interposición de medios de impugnación, constitucionales o legales en materia electoral, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

Mandato constitucional que se reitera a nivel federal en el artículo 6, párrafo 2, de la *Ley de Medios* y en el numeral 17 de la *Ley de Medios Local*.

Sin embargo, tomando en consideración que la materia de controversia incide o impacta en la limitación del derecho a la libertad de los actores, esta Sala estima necesario emitir un pronunciamiento de carácter urgente que resuelva de manera integral sus pretensiones.

---

<sup>5</sup> Jurisprudencia 30/2016, publicada en: *Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral*, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 19, 2016, pp. 21 y 22.

## 6. ESTUDIO DE FONDO

### 6.1. Materia de la controversia

#### 6.1.1. Sentencia impugnada

La *Regidora* presentó diversas peticiones a integrantes del *Ayuntamiento*, a fin de que se le entregara información y documentación relativa a la gestión municipal.

Posteriormente, promovió los juicios ciudadanos **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL**. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia ante el *Tribunal local*; en el primero controvirtió, entre otras cuestiones, las respuestas a sus solicitudes presentadas el quince y dieciséis de agosto del dos mil diecinueve; en tanto que, en el segundo, argumentó que diversos funcionarios habían sido omisos en dar respuesta a las peticiones de cuatro de marzo y veinticuatro de septiembre de ese año.

En la sentencia dictada el dieciocho de marzo en la que se analizó ese reclamo, el *Tribunal local* tuvo por acreditada la obstaculización del ejercicio del cargo e impuso multa a los actores, con fundamento en el *Código de Procedimientos*, ordenamiento que el órgano jurisdiccional estatal consideró resultaba aplicable de manera supletoria a la legislación electoral.

8

En la resolución se razonó que el **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL**. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia y el entonces **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL**. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia del *Ayuntamiento* fueron señalados continuamente como autoridades responsables por realizar diversos actos y omisiones relacionadas con la obstaculización del ejercicio del cargo de la *Regidora*, lo que motivó que en distintos juicios sometidos a conocimiento del *Tribunal local*, a saber, los juicios identificados con las claves de expediente **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL**. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia se tuviera por acreditada esta infracción y, derivado de ello, se les impusieran medidas de apremio y sanciones con el propósito de disuadir la comisión de conductas similares, lo cual resultó insuficiente para alcanzar este objetivo.

Ante la sistematicidad de las conductas en las que se declaró incurrieron los funcionarios actores, al incumplir lo ordenado en diversas sentencias del





TRIBUNAL ELECTORAL  
del Poder Judicial de la Federación

*Tribunal local*, se estimó el desacato a dichas determinaciones y procedente imponerles multa<sup>6</sup>.

La multa fue analizada en el juicio electoral **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL**. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, en cuya resolución esta Sala determinó –para los efectos que aquí interesan– que se impuso, precisamente, con motivo de la actuación o conducta reiterada o sistemática en que incurrieron los actores al obstaculizar el ejercicio del cargo de la *Regidora* e incumplir con las obligaciones encomendadas como autoridad, no por la comisión de una diversa o nueva infracción, aspecto que, debe precisarse también, no fue controvertido en esta instancia federal.

En ocasión de esa decisión, aun cuando esta Sala consideró que el *Tribunal local* se encontraba facultado para imponer medidas de apremio por el incumplimiento a sus ejecutorias en las que ordenó medidas de reparación o de protección a favor de la *Regidora*, modificó la sentencia impugnada, al calificar como fundado el agravio consistente en la indebida aplicación supletoria del *Código de Procedimientos* que sirvió como fundamento de la multa; aunado a que en otro precedente de esta Sala, en el juicio electoral SM-JE-54/2019, se había inaplicado el artículo 63, fracción III, de la *Ley de Medios Local*, por establecer una *multa fija*, en contravención al artículo 22 de la *Constitución Federal*<sup>7</sup>.

Adicionalmente, en esa determinación se calificaron como infundados los planteamientos hechos valer por los actores, en cuanto a que fueron sancionados sin haber sido llamados a juicios, ante la posible imposición de la *sanción*. La calificación del motivo de inconformidad atendió al hecho de que, contrario a lo que expusieron los inconformes, la multa no se impuso como una sanción derivada de la comisión de una infracción, sino se aclaró que se estaba ante una medida de apremio por el incumplimiento reiterado a lo ordenado en diversas sentencias del propio *Tribunal local*, lo cual justificaba la necesidad de aplicar una medida de apremio adicional que lograra disuadir su actuación.

Derivado de esa sentencia dictada por esta Sala, se instruyó al *Tribunal local* que, en el plazo concedido de cinco días hábiles, emitiera nueva

<sup>6</sup> A **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL**. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia le impuso multa por la cantidad de \$8,688.00 [ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.] y a **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL**. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia, por \$2,606.40 [dos mil seiscientos seis pesos 40/00 M.N.].

<sup>7</sup> Debe señalarse que en la sentencia local y en la emitida por esta Sala Regional se tomó en cuenta la ley procesal electoral de Querétaro vigente antes del primero de junio.

determinación en la que impusiera otra medida de apremio, de conformidad con el artículo 63 de la *Ley de Medios Local*, sin considerar o descartando la prevista en la fracción III, consistente en multa, por estimarse que, al ser fija, es inconstitucional.

En cumplimiento al fallo, el *Tribunal local* dictó la resolución que en esta oportunidad se revisa, en ella impuso a los actores la medida de apremio prevista en la fracción V del citado numeral, consistente en **arresto hasta por treinta y seis horas**, reiterando que ello atendía al hecho que las medidas previamente ordenadas en los dos precedentes destacados, habían sido ineficaces, lo que motivó señalando que las conductas vulneradoras del ejercicio del cargo de la *Regidora* se realizaron de manera sistemática y reiterada, bajo una misma dinámica o manera de actuar u operar: el diseño, ejecución, instrucción y tolerancia de conductas propias y de terceros subordinados, con el claro objetivo de impedirle realizar su función en plenitud; y se incumplieran las obligaciones que como autoridades tienen el deber de observar.

También precisó el *Tribunal local* que, con motivo de lo decidido por esta Sala, al no ser posible imponer multa, el arresto era la única medida disponible para hacer cumplir los mandatos judiciales, constitucionales y legales, razonó que era idónea, proporcional y eficaz para lograrlo, pues esto no se había conseguido con amonestaciones, llamadas de atención, requerimientos, justificaciones racionales y legales que pretendieron el cumplimiento voluntario de las normas de interés social. Razonó destacadamente que los actores han mostrado una actitud de rebeldía o desacato que necesariamente debe corregirse, ya que las autoridades y las normas están diseñadas e implementadas para lograr la paz social como uno de los fines del Derecho.

10

#### 6.1.2. Planteamiento ante esta Sala

Ante esta Sala, el entonces **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** del *Ayuntamiento* y el **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia**, esencialmente, expresan los siguientes motivos de inconformidad:

a) Señalan que el arresto es desproporcionado y vulnera el debido proceso, al no haber existido un apercibimiento previo a que se decretara,



con el cual se garantizara su derecho a una defensa, antes del acto privativo de libertad, como lo prevé el artículo 14 de la *Constitución Federal*.

b) Que es incorrecto que el *Tribunal local* impusiera el arresto como una pena o sanción por el retraso en el cumplimiento de sus determinaciones, desvirtuando la naturaleza jurídica de las medidas de apremio.

c) Que los juicios locales de origen quedaron sin materia y, por tanto, no puede ejecutarse el arresto porque, previo al dictado de la resolución impugnada, se colmó la pretensión de la *Regidora* al haber dado respuesta a las solicitudes que presentó y entregado la documentación solicitada.

d) Que se vulnera el principio *non reformatio in peius* –no reformar en perjuicio del recurrente–, ya que, con motivo de la propia impugnación de los actores, su situación empeoró o se agravó, al ser el arresto una *sanción* más severa o mayor que la multa inicialmente impuesta.

Indican que esto vulnera su derecho de acceso a la justicia, porque inhibe su voluntad de impugnar sanciones que estimen contrarias a derecho, por temor a que se les aplique una más perjudicial.

e) Que se individualizó incorrectamente la sanción, al no haberse analizado en la sentencia los elementos necesarios para imponerla, entre ellos, la gravedad de la responsabilidad; las circunstancias de modo, tiempo y lugar; las condiciones socioeconómicas; las condiciones externas y los medios de ejecución; la reincidencia; y, en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado.

f) Que se realiza un doble juzgamiento por conductas que previamente fueron sancionadas, a las cuales, incluso, el *Ayuntamiento* dio cumplimiento al atender las solicitudes presentadas por la *Regidora*.

g) Que la medida de apremio es excesiva por no encontrarse graduada, toda vez que no se justificó la determinación de imponer un arresto de treinta y seis horas, cuando la *Ley de Medios Local* establece este plazo como máximo, pudiendo imponer la autoridad uno menor y, a partir de las agravantes particulares del caso, incrementarlo.

Adicionalmente, los actores solicitan en su demanda que esta Sala otorgue efectos suspensivos a la resolución que reclaman, a fin de evitar la irreparabilidad de la violación alegada y, al ejecutarse el arresto ordenado por el *Tribunal local*, podría tener como consecuencia que estos juicios queden sin materia.

## 6.2. Cuestión a resolver

A partir de estos agravios, la Sala Regional debe dar respuesta a los siguientes planteamientos:

- 1) Si el arresto cumple o debe cumplir con la motivación atinente a la individualización de una sanción.
- 2) Si la medida decretada vulnera el principio de no reformar en perjuicio o *non reformatio in peius*.
- 3) Si el *Tribunal local* tenía el deber de motivar el plazo del arresto, ante la previsión legal que establece las treinta y seis horas como un tope o límite máximo.

### 6.3. Decisión

Debe **modificarse** la sentencia impugnada, ya que **les asiste razón a los actores** en cuanto expresan que el *Tribunal local* omitió justificar la decisión de ordenar el arresto por el término máximo o duración máxima, imponiéndolo por treinta y seis horas.

- a) Se consideran, como se explica, **ineficaces** los agravios encaminados a cuestionar la legalidad de la medida de apremio por estimar que constituye una *sanción* y un doble juzgamiento por una misma conducta, toda vez que en la resolución dictada por esta Sala en el juicio electoral **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia**, de la cual emana en cumplimiento la determinación que se revisa, se validó el actuar del *Tribunal local*, en cuanto a su facultad de imponer dichas medidas para hacer cumplir sus ejecutorias o determinaciones, lo que en modo alguno se traduce en una sanción como acusan los inconformes y, en ese sentido, no es dable sostener que era necesario fuesen apercibidos o que, de manera previa al dictado de la sentencia, se les garantizara derecho de audiencia para demostrar que no incurrieron en una actitud rebelde o contumaz, como tampoco era necesario, por esa razón, realizar el examen de los elementos que la ley exige para estar en aptitud de individualizar las sanciones.

Destacándose que, la necesidad de imponer una medida de apremio se encuentra plenamente justificada y quedó firme, como consecuencia de lo decidido en dicho precedente, sin que sea jurídicamente posible analizarla nuevamente pues, en el caso, únicamente se encuentra a debate la elección del arresto como medida idónea y eficaz para lograr el



objetivo pretendido, al descartarse como válida la multa que antes se había elegido.

- b) **Es correcta la decisión del *Tribunal local*** de elegir imponer esta medida, porque no transgrede el principio de no reformar en perjuicio o *non reformatio in peius*. Contrario a lo expresado por los actores, la observancia del núcleo del principio no conlleva en todos los casos –o sin excepción–, a mantener vigente un acto o decisión más benévola o menos lesiva, no es un mandato de carácter absoluto y, acorde con los principios de obligatoriedad y orden público, rectores de las sentencias dictadas por los tribunales especializados en la materia, era necesario que el *Tribunal local*, al declararse contraria a la *Constitución Federal* la aplicación de una multa fija, debía descartarla y optar por otra para hacer cumplir sus determinaciones, más aun en el caso en que, del catálogo previsto en la *Ley de Medios Local*, las medidas de apremio aplicadas con anterioridad –a excepción de la multa por ser inconstitucional–, resultaron insuficientes.
- c) **Les asiste razón** a los actores en cuanto a que el *Tribunal local* debió justificar por qué impuso el plazo de treinta y seis horas de arresto, cuando la *Ley de Medios Local* prevé éste como un límite o tope máximo, lo que otorga al operador jurídico, en consecuencia, la posibilidad de imponer un término o duración menor.

3

Al no indicarse en la resolución impugnada, las condiciones o circunstancias tomadas en cuenta para fijar dicha temporalidad, el *Tribunal local* faltó a su deber de motivar debidamente su decisión.

#### 6.4. Justificación

##### 6.4.1. Son ineficaces los agravios hechos valer para cuestionar la ilegalidad de la imposición de una medida de apremio, al haber quedado firme su justificación o necesidad para hacer cumplir las determinaciones emitidas por el *Tribunal local*

Los actores expresan que la resolución impugnada es ilegal porque el arresto se impuso como sanción y no como medida de apremio y, en consecuencia, era necesario se individualizara debidamente; también indican que era necesario que se garantizara su derecho de audiencia a través de una

apercibimiento previo; que no incumplieron su deber de proporcionar a la *Regidora* la información o documentación solicitada y que se realiza un doble juzgamiento o reproche por conductas que fueron analizadas y sancionadas en un diverso juicio local.

Son **ineficaces** los agravios hechos valer.

La legalidad de la determinación del *Tribunal local* de imponer una medida de apremio por el incumplimiento de sus determinaciones fue un aspecto analizado en la sentencia del juicio electoral **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL**. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia; por tanto, no es posible que esta Sala nuevamente se pronuncie sobre este aspecto.

Baste decir que, en ocasión de ese precedente, del cual derivó la resolución que se revisa, al haberse dictado en cumplimiento, se determinó que el *Tribunal local* está facultado para imponer medidas de apremio por el incumplimiento a sus sentencias.

Asimismo, en ese fallo se descartó que la imposición de una medida de apremio vulnere el derecho de audiencia de los actores, aun cuando previamente no hayan sido llamados o convocados a juicio, dado que la naturaleza de las medidas de apremio no es similar a la que corresponde a la sanción impuesta con motivo de una denuncia que da lugar al seguimiento de un juicio o proceso y a la medida de protección del debido proceso y, en particular, el derecho de audiencia previa y defensa.

Entonces, se precisó que, ante el incumplimiento o inobservancia reiterada y sistemática de los mandatos judiciales, se encontraba justificada la necesidad de imponer una medida de apremio que lograra disuadir la actuación rebelde o contumaz de los actores y que llevara a acatar lo instruido por la autoridad jurisdiccional.

Particularmente, debe tenerse presente que, si bien en el citado juicio se concluyó que la multa impuesta como medida de apremio carecía de sustento jurídico, ello no implicó estimar que la imposición de una medida de apremio fuese, por sí misma, ilegal y, en ese sentido, se eximiera a los actores de observar los mandatos judiciales del *Tribunal local*, pues ello



atentaría contra los principios de obligatoriedad y orden público, rectores de las sentencias emitidas por las autoridades competentes<sup>8</sup>.

Lo que se determinó fue que, del catálogo de medidas de apremio establecido en el artículo 63 de la *Ley de Medios Local*, la autoridad seleccionara una medida distinta a la multa, quedando firme la determinación de imponerla.

En palabras claras, lo único que derivado de ese fallo estaba sujeto a definición era qué medida de apremio procedía imponer, descartando la multa.

De ahí que, aun cuando los promoventes señalan que no puede *sancionarse* el retraso en el cumplimiento de las sentencias y que los juicios locales de origen quedaron sin materia y, por tanto, no puede ejecutarse el arresto porque, previo al dictado de la resolución impugnada, se colmó la pretensión de la *Regidora* al entregarle la documentación o información solicitada, sus planteamientos resulten también ineficaces pues, como se precisó, la medida de apremio atiende o es consecuencia de la definición judicial de que han incurrido en una actitud sistemática, reiterada y generalizada de obstaculizar el ejercicio y desempeño de la funcionaria municipal denunciante, lo cual ya no es motivo de esta litis.

Por esas razones, también se descarta estemos ante un acto de doble juzgamiento o reproche por las mismas conductas.

**6.4.2. No se vulnera el principio de *non reformatio in peius* o de no reformar en perjuicio, porque ante la actitud contumaz del cumplimiento de determinaciones judiciales, procedía imponer una medida de apremio que resultara idónea y eficaz, descartándose las que previamente no lograron un efecto disuasivo y aquella que se reclamó como inconstitucional**

**No asiste razón** a los actores cuando afirman que la sentencia impugnada vulnera el principio de no reformar en perjuicio o *non reformatio in peius* porque, con motivo de su propia impugnación –al promover los juicios electorales **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y**

<sup>8</sup> Sirve de sustento la jurisprudencia 31/2002 de la Sala Superior, de rubro: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO, publicada en *Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación*, suplemento 6, año 2003, p. 30.

**motivación al final de la sentencia** –, se agrava su situación o es más perjudicial para ellos el arresto que se ordena por ser una medida de apremio más severa o de mayor entidad que la multa que se dejó sin efectos.

De acuerdo al principio del derecho procesal *non reformatio in peius* –no reformar en perjuicio–, un tribunal de segunda o ulterior instancia no puede negar o reducir al recurrente lo que obtuvo en la sentencia anterior, si ésta no fue impugnada por la contraparte. En esas condiciones, el impugnante no podría finalizar esa posterior instancia en una posición menos favorable a cuando la inició.

Este principio tiene como sustento la disponibilidad de los derechos involucrados a favor de las partes, pues se entiende ejercida por el recurrente de una sentencia respecto de los aspectos que no combata –y, por ende, consienta– en sus agravios, y de su contraparte por haber recibido un fallo adverso en el primer grado y no haberlo impugnado. Con ello, tutela la seguridad jurídica de la parte recurrente, pues cuando acude a combatir un fallo –con el propósito de mejorar lo ahí obtenido– el órgano jurisdiccional no puede agravar su situación jurídica.

16 En otras palabras, el principio no permite que las autoridades revisoras agraven la situación del recurrente o eliminen los aspectos favorables obtenidos en el acto reclamado que se revisa.

Es decir, impide un cambio en perjuicio que trascienda los límites de lo resuelto por el órgano responsable, pero no se traduce en la posibilidad, en sentido contrario, de vincular a otorgar un beneficio de forma activa que no derive de ese acto. Con lo cual puede afirmarse que no conlleva necesariamente la posibilidad de vincular a la autoridad a otorgar un beneficio que no deriva directamente del acto impugnado<sup>9</sup>.

Como lo ha sostenido esta Sala Regional, el principio no es absoluto, cede o no es aplicable cuando se juzgan actos que entrañen vulneración manifiesta a disposiciones constitucionales, a los principios rectores de la materia electoral o al diseño y funcionamiento del sistema jurídico.

Para esta Sala, el principio de *non reformatio in peius* que, en efecto, ve a una búsqueda de una consecuencia jurídica menor o a mejorar la situación

---

<sup>9</sup> Sirve como criterio orientador la tesis I.4o.C.10 K (10a.) de Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: NON REFORMATIO IN PEIUS. SÓLO PROTEGE LOS BENEFICIOS REALES OTORGADOS AL IMPUGNANTE, Y NO LOS APARENTES O LAS SIMPLES EXPECTATIVAS, publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, libro 41, tomo II, abril de 2017, p. 1763.





previa obtenida en decisiones que se someten a nuestra revisión, podrá considerarse como atendible cuando no se esté dilucidando como materia del medio de defensa una cuestión de orden público, de orden de la norma y del estado de derecho, cuya disponibilidad, claramente, no está dada o condicionada a la posibilidad de beneficio a la esfera jurídica de una persona.

Sobre los casos en que es atendible, acorde a esta Sala no lo son todos, pues no estamos ante una regla sin excepción aplicable a todas las materias y a todos los derechos, como queda en evidencia en este asunto.

De ahí que en casos como el que se decide, en el que en palabras llanas se pretende retrotraer la eficacia de una medida de apremio de menor consecuencia para la libertad deambulatoria, pese a que fue descartada por una impugnación de los propios accionantes, quienes hicieron valer en un diverso juicio la inconstitucionalidad de ella por tratarse de una multa fija, la dimensión de aplicabilidad del principio que se sugiere en las demandas, pierde de vista dos cuestiones, la primera, que esa medida que juzga menor no está disponible como opción y dos, que al haberse dejado al arbitrio de la autoridad elegir aquella que resultara acorde con el fin buscado con su imposición, no se encuentra ninguno de los accionantes en una condición de mayor beneficio como sugieren, sino ante una nuevamente creada posibilidad de imponer una medida de apremio, cuál, la que la autoridad estimara con base en dicho arbitrio, procedente, pero descartando la que sugieren que debe prevalecer y que se insiste, a partir de una impugnación de los propios enjuiciantes se descartó como posible.

En resumen, conforme a lo razonado, la dimensión pretendida de interpretación y observancia del principio en cita no resulta viable, pues, como se sostiene, no puede cobrar aplicación cuando se involucren cuestiones de orden público que no sean disponibles para las partes. Caso que se presenta cuando la materia de análisis ve a aspectos que los tribunales deben acatar y vigilar por su importancia y trascendencia en el orden constitucional y/o legal<sup>10</sup>.

Como se destacó en líneas previas, la medida de apremio obedeció a la necesidad de hacer cumplir las determinaciones emitidas por el *Tribunal local* en diversas ejecutorias en las que ordenó medidas de reparación o de protección a favor de la *Regidora*, las cuales no fueron observadas por los actores, realizando actos de manera reiterada o sistemática que

---

<sup>10</sup> Véase la sentencia dictada en el juicio ciudadano SM-JDC-283/2019, la cual fue confirmada por la Sala Superior al decidir el SUP-REC-8/2020.

obstaculizaban el ejercicio de su cargo, cometidos bajo una misma dinámica o manera de actuar u operar: el diseño, ejecución, instrucción y tolerancia de conductas propias y de terceros subordinados, con el claro objetivo de impedirle realizar su función en plenitud.

Con motivo de la actitud persistente o contumaz de los inconformes, el *Tribunal local* estimó procedente imponer, en un primer momento, multa, aplicando supletoriamente el *Código de Procedimientos*.

Determinación que fue modificada por esta Sala, por estimar que la medida incorrectamente se sustentó en dicho ordenamiento, cuando el supuesto que se pretendió suplir no cumplía los requisitos necesarios<sup>11</sup>.

Por lo que, se instruyó al *Tribunal local* emitiera una nueva determinación en la que impusiera una nueva medida de apremio a los aquí actores, de conformidad con el artículo 63 de la *Ley de Medios Local*, sin considerar o descartando aquella prevista en su fracción III, consistente en multa o sanción económica, por ser contraria a lo previsto en el artículo 22 de la *Constitución Federal* que prohíbe imponer *multas fijas*, es decir, aquellas que no contienen un parámetro establecido en cantidades o porcentajes mínimos y máximos que permitan que la autoridad jurisdiccional determine el monto de acuerdo con las circunstancias personales del infractor y la gravedad del hecho.

El texto de dicho precepto es el siguiente:

**Artículo 63.** Para hacer cumplir las disposiciones del presente ordenamiento, así como de las resoluciones y las sentencias que se dicten, el Tribunal y el Consejo podrán solicitar la aplicación, sin ulterior procedimiento o trámite, de los medios de apremio y las correcciones disciplinarias siguientes:

I. Apercibimiento;

II. Amonestación;

III. Multa de cien veces el salario mínimo diario vigente en el Estado.

En caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada;

IV. Auxilio de la fuerza pública; o

**V. Arresto hasta por treinta y seis horas.**

<sup>11</sup> Véase la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE, publicada en *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, libro XVIII, marzo de 2013, tomo 2, p.1065, en la cual se establece que la aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes.

Como se motiva, para esta Sala, la imposición de esta última medida, el arresto, no vulnera el principio de *non reformatio in peius*, toda vez que éste debe entenderse como un principio que no es absoluto, que cede ante la ponderación de otros principios, como son los de obligatoriedad y orden público, rectores de las sentencias dictadas por los tribunales especializados en la materia.

Estos principios se enmarcan en el derecho a la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 17 de la *Constitución Federal*. La función de los tribunales no se limita a resolver las controversias que se sometan a decisión de manera pronta, completa e imparcial; para que este derecho se garantice, es necesario que los órganos jurisdiccionales vigilen y provean lo necesario para que se lleve a cabo la plena ejecución de sus sentencias, las cuales son definitivas e inatacables<sup>12</sup>.

Garantizar el cumplimiento de las sentencias no es potestativo, es un deber de los tribunales, para lo cual han de adoptar las acciones necesarias para evitar el desacato, entre las cuales se encuentran los medios o medidas de apremio.

La definición de la medida que se considere más efectiva para hacer cumplir sus determinaciones, cuando la ley no establece un orden de prelación, corresponde al arbitrio de las y los juzgadores, debiendo expresar las razones o motivos que llevaron a seleccionar un medio en particular y descartar otro<sup>13</sup>, como en el caso ocurrió.

Como se razonó en la sentencia y se coincide con ello, al actualizarse una situación excepcional o extraordinaria en la especie, por no ser posible imponer una multa con motivo de lo decidido por esta Sala, el arresto era la única medida disponible para hacer cumplir los mandatos judiciales, constitucionales y legales de la autoridad, al ser idónea, proporcional y eficaz para lograrlo, ya que ello no se había logrado con la aplicación de múltiples amonestaciones, llamadas de atención o apercibimientos, requerimientos y justificaciones racionales y legales que pretendieron el cumplimiento voluntario de las normas de interés social que previamente habían sido

<sup>12</sup> En el Estado de Querétaro, ello se establece en el artículo 87 de la *Ley de Medios Local*.

<sup>13</sup> Véase la jurisprudencia P./J. 21/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: MEDIOS DE APREMIO. SI EL LEGISLADOR NO ESTABLECE EL ORDEN PARA SU APLICACION, ELLO CORRESPONDE AL ARBITRIO DEL JUZGADOR, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, tomo III, mayo de 1996, p. 31.

ordenadas en, al menos, tres precedentes dictados por el propio *Tribunal local*.

Lo incorrecto del planteamiento de los actores radica en que la modificación de la medida de apremio no se generó en el análisis de la legalidad de los actos que le dieron origen, es decir, no se impuso una sanción más enérgica o severa por considerar que la multa fuera insuficiente por la gravedad de las conductas, sino que esa modificación atendió a lo que ya se ha señalado, a la indebida aplicación supletoria del *Código de Procedimientos* y a la inconstitucionalidad de la disposición que prevé la multa fija.

La inconstitucionalidad de la multa no generó un beneficio real a los promoventes, pues la determinación de imponer una medida de apremio con la finalidad de hacer cumplir las determinaciones del *Tribunal local* se estimó legal y ello quedó firme.

Sin que la sentencia de esta Sala tuviera como efecto que a los actores se eximiera de cumplir los mandatos judiciales, tampoco vincular a la autoridad jurisdiccional para imponer otra medida que fuese benéfica o favorable para ellos, ya que estos aspectos son ajenos o no derivan del acto que se revisó, pudiendo el *Tribunal local* elegir la que estimara más eficaz, atendiendo a las circunstancias particulares del caso sometido a conocimiento, con la salvedad de no variar las conductas ya acreditadas y expresar las razones que justificaran su elección.

20

#### **6.4.3. El *Tribunal local* debió justificar por qué determinó procedente imponer el plazo máximo de treinta y seis horas que la *Ley de Medios Local* prevé para el arresto**

Como se anticipó, es **fundado** el agravio relativo a la falta de justificación de la determinación de imponer un arresto de treinta y seis horas, cuando la *Ley de Medios Local* establece esta duración como su máximo.

De la sentencia se advierte que, aun cuando el Tribunal local dio las razones por las cuales estimó procedente imponer el arresto como medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, fue omiso en indicar porqué el referido plazo de treinta y seis horas y no uno menor era el idóneo para lograr esa finalidad.



La fracción V del artículo 63 de dicho ordenamiento –vigente hasta el primero de junio–, expresamente prevé, como medida de apremio el **arresto hasta por treinta y seis horas**.

Al respecto, es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, si bien las y los jueces pueden emplear esta medida, el término definido por el legislador ordinario ha de entenderse un límite máximo, pues la preposición *hasta* se emplea para expresar el término de tiempo y, aun cuando no se señale o se establezca expresamente un límite mínimo, éste debe entenderse como el de *una hora*, por ser ésta la unidad utilizada para imponer la medida en cita.

De esta manera, para determinar el tiempo del arresto que corresponda, la autoridad jurisdiccional debe cumplir los principios de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 de la *Constitución Federal*, deberá razonar y pormenorizar los motivos para fijar su duración<sup>14</sup>.

En este caso, el *Tribunal local* inobserva tal mandato, en tanto que no justificó por qué procedía imponer treinta y seis horas de arresto, cuando la *Ley de Medios Local* lo prevé como límite o tope máximo, otorgando la posibilidad implícita de imponer un plazo menor si así se estimara conveniente.

Al no haberse indicado en la resolución impugnada, las condiciones y circunstancias que se tomaron en cuenta para fijar dicha temporalidad, se faltó al deber de motivar debidamente la decisión.

En consecuencia, lo procedente es **modificar** la sentencia dictada en el juicio ciudadano **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** el veintitrés de octubre, para el efecto de que el *Tribunal local* emita nueva determinación en la que subsane la ausencia de motivación que se identifica sobre la duración del arresto impuesto como medida de apremio.

Realizado lo anterior, deberá informarlo a esta Sala Regional dentro de las veinticuatro horas siguientes, remitiendo las constancias que así lo acrediten; primero, vía correo electrónico institucional a la cuenta denominada

<sup>14</sup> Criterio sostenido por la Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 89/2005, de rubro: ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO HASTA POR 36 HORAS. SUS LÍMITES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, tomo XII, año 2005, p. 11.

## SM-JE-64/2020 Y SU ACUMULADO

*cumplimientos.salamonterrey@te.gob.mx* y, posteriormente, en original o copia certificada por el medio más rápido.

### 7. RESOLUTIVOS

**PRIMERO.** Se **acumula** el expediente SM-JE-65/2020 al diverso SM-JE-64/2020, por lo que debe glosarse copia certificada de los puntos resolutiveos de esta sentencia a los autos del asunto acumulado.

**SEGUNDO.** Se **modifica** la sentencia impugnada.

En su oportunidad, archívense los expedientes como asuntos concluidos; en su caso, devuélvase la documentación que en original haya exhibido la responsable.

### NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvieron, por **mayoría** de votos de la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho y el Magistrado Yairsinio David García Ortiz, con el voto en contra del Magistrado Ernesto Camacho Ochoa, quien emite voto particular, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

## 22 VOTO DIFERENCIADO QUE EMITE EL MAGISTRADO ERNESTO CAMACHO OCHOA EN EL JUICIO ELECTORAL SM-JE-64/2020 Y ACUMULADO<sup>15</sup>.

Con absoluto respeto a lo decidido por la mayoría de los integrantes de esta Sala Monterrey, considero necesario emitir el presente **voto diferenciado, dado que para el suscrito la sentencia local que impuso un arresto de 36 horas al** ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia **y al** ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia **del Ayuntamiento rebasa o resulta más grave y trascendental que la multa impuesta en la sentencia previamente emitida por dicho tribunal, que** quedó sin efectos a consecuencia del planteamiento de los mismos impugnantes, ante lo cual, el Tribunal Local sólo estaba autorizado para emitir una nueva determinación, conforme a la ejecutoria de esta Sala Monterrey (ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia), evidentemente, sin modificar o agravar la impuesta en primer término en perjuicio de los actores, conforme al principio

<sup>15</sup> Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 199, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 48, último párrafo, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



de no reformar o resolver en perjuicio de los sancionados cuando son los únicos impugnantes, lo cual, para el suscrito, con todo respeto para la mayoría, el efecto de la sentencia sólo podría ser en el sentido de ordenar al Tribunal Local imponer una sanción que no sea más trascendental de la multa previamente definida, y dado que si bien reconozco, en abstracto, que dicho principio puede ser objeto de excepciones por las circunstancias del caso, desde mi perspectiva, no puede tener el alcance de ceder *ante la ponderación de otros principios, como son los de obligatoriedad y orden público, rectores de las sentencias dictadas por los tribunales especializados en la materia.*

En la sentencia aprobada por la **mayoría** se sostiene que se debe modificar la sentencia impugnada, porque la decisión del Tribunal Local de imponer un arresto, no transgrede el principio de no reformar en perjuicio (*non reformatio in peius*), porque el principio no es absoluto y tiene supuestos de excepción, en los que tiene que ceder *ante la ponderación de otros principios, como son los de obligatoriedad y orden público, rectores de las sentencias dictadas por los tribunales especializados en la materia* y, en el caso, consideran que se actualizó la excepción.

En ese sentido, consideran que el Tribunal de Querétaro debió justificar por qué impuso el plazo de 36 horas de arresto, cuando la Ley de Medios Loca prevé éste como un límite o tope máximo, lo que otorga al operador jurídico la posibilidad de imponer un término o duración menor.

Por tanto, al diferir de la decisión de la mayoría de las magistraturas, emito el presente voto diferenciado en los términos siguientes:

#### Esquema

- Glosario
- Antecedentes
- Estudio de fondo
- Apartado preliminar. Materia de la controversia
- Apartado I. Decisión
- Apartado II. Desarrollo o justificación de las decisiones
  - 1.1. Principio de no reformar en perjuicio (*non reformatio in peius*)
  2. Contexto y resolución concretamente cuestionada
  3. Valoración del presente voto diferenciado

#### Glosario

<b>Ayuntamiento:</b>	Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, Querétaro.
<b>Impugnantes:</b>	ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia. ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia del Ayuntamiento y ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia. ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia Municipal.
<b>Instituto Local:</b>	Instituto Electoral del Estado de Querétaro.
<b>Ley de Medios:</b>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
<b>Ley de Medios local:</b>	Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro, vigente hasta antes del 1 de junio de 2020.
<b>Sentencia impugnada:</b>	Sentencia de 23 octubre de 2020, del Tribunal Electoral de Querétaro en el

expediente **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia.**  
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.

Tribunal de  
Querétaro/Local:

### Antecedentes

De las constancias de autos y afirmaciones realizadas por las partes se advierten los siguientes hechos relevantes:

#### Preliminar: Antecedentes de hechos y jurídicos contextuales

El 1 de octubre de 2018, **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** asumió el cargo como **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** Municipal del Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, Querétaro. El 2 siguiente, **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** fue designado **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** del referido Ayuntamiento.

Ante diversos hechos, una Regidora del Ayuntamiento promovió diversos juicios ciudadanos y procedimientos, en los que planteó la obstaculización del ejercicio del cargo y violencia política, en los términos siguientes:

El 12 de septiembre de 2019, presentó demanda contra: **1.1. El ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia,** **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** del Ayuntamiento, Director de Obras Públicas y Director de Desarrollo Social, por las negativas del 4 de septiembre de ese año, de proporcionar la información que solicitó sobre el Programa de Obra Anual 2019 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio de Cadereyta de Montes, bajo el argumento de que la información no tenía relación con sus funciones y las comisiones que integra, y **1.2. El ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** del Ayuntamiento, por la negativa de esa misma fecha, de entregarle un informe respecto la organización de la Feria “Cadereyta 2019”, bajo la consideración de que en la sesión en la que se trató el tema no se aprobó la elaboración de algún reporte, sino la integración del comité (**ELIMINADO:**





**DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia**<sup>16</sup>).

El 25 de octubre siguiente, se presentó juicio ciudadano contra: **2.1. El ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** y el **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** del Ayuntamiento, por las negativas de proporcionarle la información y documentación que solicitó relacionada con la compra, inventario y asignación de equipos de cómputo, bajo el argumento de que *no cuentan con la información al no ser los encargados de esos asuntos*, y al Contralor Municipal, por la omisión de respuesta a la misma solicitud, y **2.2. El ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** del Ayuntamiento, por la omisión de contestar su solicitud de información relacionada con la plantilla de trabajadores de la delegación El Palmar (**ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia**<sup>17</sup>).

**3. Sentencia.** El 16 de diciembre siguiente, previa acumulación de los medios de impugnación, el Tribunal de Querétaro desechó la demanda del juicio **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia**, al haber quedado sin materia, porque las solicitudes de la Regidora habían sido contestadas y, por lo que ve a los hechos denunciados en el **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia**, declaró la existencia de violencia política de género contra la Regidora y, luego de realizar un análisis contextual y global de las diversas imputaciones y sentencias en las que había condenado al **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** y al **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** del Ayuntamiento, determinó procedente imponerles, como medida de apremio, una multa por la cantidad de \$8,449.00 m.n. y \$4,224.5 m.n., respectivamente.

### I. Primer juicio ciudadano constitucional

<sup>16</sup> La denuncia de esos hechos se presentó ante el Tribunal Local, por lo que se integró el **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** y, de forma acumulada con el **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** resolvió que existió violencia política de género contra la Regidora impugnante, sin embargo, ante la impugnación de esa determinación esta Sala Monterrey en el **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia**, la revocó y la reencauzó al Instituto Local porque, en principio, es la competente para investigar, sustanciar y resolver lo relacionado con violencia política de género.

<sup>17</sup> Denuncia de hechos ante Tribunal Local que dio origen al juicio ciudadano **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia**, el cual se resolvió de forma acumulada al precisado en la cita anterior.

1. **Demandas y sentencia.** Inconformes, el 8 de enero de 2020<sup>18</sup>, el **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** y el **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** del Ayuntamiento presentaron juicios electorales, en los cuales, el 30 de enero siguiente, esta Sala Monterrey dejó sin efectos el desechamiento del juicio ciudadano local **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia**, a fin de que se duplicara la demanda y, por un lado, el Instituto Local conociera en primera instancia de la pretensión sancionadora y, por otro lado, el Tribunal Local resolviera las pretensiones de la Regidora relacionadas con la obstaculización del ejercicio del cargo (**ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia**).

2. **Segunda sentencia local.** El 20 de febrero, el Tribunal de Querétaro, en cumplimiento a lo ordenado por esta Sala, desechó la demanda por falta de competencia para investigar y sancionar hechos posiblemente constitutivos de violencia política de género y la reencauzó al Instituto Local.

3. **Resolución incidental de la Sala Monterrey que ordenó al Tribunal Local una nueva sentencia.** El 26 siguiente, la Regidora interpuso incidente de incumplimiento de sentencia porque, desde su perspectiva, el Tribunal de Querétaro no se pronunció sobre sus pretensiones relacionadas con la obstaculización de su cargo. El 12 de marzo, esta Sala Regional declaró fundado el incidente y ordenó al Tribunal Local que emitiera una nueva sentencia en la que analizara si se había vulnerado el derecho de petición de la denunciante, y dada la sistematicidad de no entregar la información solicitada, si ello se traduciría en una obstaculización a ejercer el cargo de Regidora.

4. **Nueva sentencia local.** En atención a ello, el 18 de marzo, declaró la obstaculización del cargo de la Regidora por las omisiones de respuestas, retrasos injustificados y negativas de entregar la información que solicitó, por lo que impuso multas por la cantidad de \$8,688.00 m.n. y \$2,606.40 m.n., al **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** y **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** del Ayuntamiento, respectivamente.

## II. Tercera vuelta en la instancia constitucional

<sup>18</sup> En adelante todas las fechas se refieren al año 2020, salvo precisión en contrario.



**1. Demandas y sentencia.** El 1 de junio, exclusivamente los impugnantes **presentaron juicios electorales**, con la pretensión de que las multas quedaran sin efectos, debido a que: **i)** el Tribunal de Querétaro no tenía facultad para inaplicar una norma electoral, y **ii)** no debió aplicar de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles para multarlos. El 15 de octubre, esta Sala Monterrey modificó la resolución impugnada, porque, esencialmente, consideró que no debió aplicar de manera supletoria el referido código, por lo que ordenó la imposición de otra de las medidas de apremio previstas en la Ley de Medios local (**ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia**).

**2. Sentencia del Tribunal de Querétaro en cumplimiento. Resolución impugnada.** El 23 de octubre, el Tribunal Local emitió sentencia en el juicio **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia**, en el que de nueva cuenta declaró la obstaculización del cargo de la Regidora por las omisiones de respuestas, retrasos injustificados y negativas de entregar la información que solicitó, pero en esta ocasión, al considerar que estaba impedido para volver a imponer una multa con fundamento en el Código de Procedimientos Civiles, y que tampoco podía imponer la multa fija de la Ley de Medios local, realizó un nuevo ejercicio de individualización en el que optó por el arresto por 36 horas para e **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación a final de la sentencia** y **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** del Ayuntamiento al considerar que era la medida idónea.

### **III. Juicios electorales ante esta Sala Monterrey**

**1. Juicios electorales.** Inconformes, el 29 siguiente, el **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** del Ayuntamiento (SM-JE-64/2020) y el **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** (SM-JE-65/2020) presentaron juicios electorales, en los que plantean que indebidamente se les sancionó, esencialmente, porque: i) el Tribunal de Querétaro aplicó una medida más alta a la que impugnó en un principio y que revocó esta Sala Regional y, en todo caso, ii) debió mediar apercibimiento antes de la imposición de la sanción, iii) debió tomar en cuenta que al momento de imponer la sanción ya se había cumplido la pretensión de la Regidora, y iv) debió graduar la medida de apremio a fin de establecerla de entre un mínimo y un máximo.

## Estudio de fondo

### Apartado preliminar. Materia de la controversia

**1. Contexto fáctico y jurídico de la presente controversia.** La sentencia que se revisa es la última emitida en una amplia cadena impugnativa, en la que esta Sala Monterrey ha revocado sentencias previas del Tribunal de Querétaro, y en especial, la última, **únicamente** derivado de la impugnación presentada por el **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** y el **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** del Ayuntamiento impugnantes, quienes pidieron y alcanzaron que esta Sala dejara sin efectos las multas que les había impuesto dicho tribunal, debido a que esta Sala consideró que se fundamentaron en una normativa civil que no era aplicable (SM-JE-19/2020 y SM-JE-20/2020 acumulados).

**2. Sentencia impugnada** (**ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia**). En la resolución que se revisa, el Tribunal de Querétaro, de nueva cuenta declaró que el **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** y el **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** del Ayuntamiento obstaculizaron el ejercicio del cargo de la Regidora y, para cumplir con la sentencia de esta Sala Monterrey, consideró que no era posible aplicar nuevamente una multa basada en la legislación procesal civil, ni en la Ley de Medios local, en su lugar, determinó que era procedente tomar en cuenta nuevamente todo el catálogo de medidas de apremio, sanciones, o consecuencias jurídicas posibles, y optó por imponer un arresto de 36 horas.

**2. Pretensiones y planteamientos.** El **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** y el **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** del Ayuntamiento pretenden que se **revoque** la sentencia impugnada, exclusivamente en lo que corresponde a la individualización o definición de la sanción, esencialmente, porque en su concepto: **i)** el Tribunal de Querétaro aplicó una medida de apremio, consecuencia o sanción más alta de aquella que ellos mismos habían impugnado y conseguido dejar sin efectos en una sentencia previa emitida por esta Sala y, en su caso, **ii)** debió analizar la legalidad de la medida impuesta, pues a su parecer, debían tomar en cuenta que al momento de imponer la sanción ya se había cumplido la



pretensión de la Regidora, además de que tuvo que apercibirse antes de la imposición de la sanción, y graduar la medida de apremio a fin de establecerla de entre un mínimo y un máximo.

**3. Cuestiones a resolver.** En atención a lo expuesto, los temas a resolver serían los siguientes: **i.** ¿El Tribunal de Querétaro estaba autorizado para imponer una medida de apremio, consecuencia o sanción más grave o trascendental de la impuesta en una sentencia previa de esta misma cadena impugnativa? y, en su caso, **ii.** ¿Fue apegado a Derecho el ejercicio de individualización, la gradación y condiciones previas para la imposición del arresto como medida de apremio fijada, para evitar la repetición de las conductas declaradas antijurídicas?

#### **Apartado I. Decisión**

Para el suscrito se debe **revocar** la sentencia del Tribunal de Querétaro en la parte en la que determinó imponer un arresto de 36 horas al **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** y al **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** del Ayuntamiento, porque dicha determinación rebasa o resulta más grave y trascendental de la multa impuesta en la sentencia previamente emitida por dicho Tribunal Local, que quedó sin efectos derivado del planteamiento de los impugnantes y que, por ende, sólo lo autorizaba para que emitiera una nueva determinación, conforme a la ejecutoria de esta Sala Monterrey (**ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia**), evidentemente, sin modificar o agravar la impuesta en primer término en perjuicio de los impugnantes.

9

#### **Apartado II. Desarrollo o justificación de las decisiones**

##### **1. Principio de no reformar en perjuicio (non reformatio in peius)**

El principio de no modificar una decisión en perjuicio (*non reformatio in peius*) es un criterio jurídico vinculante para la actuación de los órganos, jueces y tribunales encargados de resolver sobre la aplicación de sanciones, conforme al cual, en términos generales, la impugnación que presenta una persona no puede derivar en una nueva resolución que agrave en su perjuicio la situación jurídica originalmente reclamada.

De acuerdo a dicho principio, en general, un tribunal de segunda instancia, de instancia constitucional revisora y por mayoría de razón los órganos que actúan en cumplimiento, ante la impugnación aislada, única o exclusiva de la persona sancionada (sin que la contraparte la cuestione), no puede emitir una resolución que agrave la condición originalmente reclamada.

Desde luego, con las excepciones que se han reconocido, entre otros aspectos, con base en la disponibilidad de los derechos involucrados a favor de las partes y que el tema en controversia no sea objeto de una pretensión diversa que busque agravar o adicionar responsabilidades al sancionado<sup>19</sup>.

En suma, el tribunal u órgano que revisa o emite una segunda determinación en cumplimiento, no está jurídicamente autorizado para agravar la situación del sancionado cuando es el único que impugna la sentencia controvertida.

## 2. Contexto y resolución concretamente cuestionada

Como se anticipó, en una última sentencia emitida por el Tribunal de Querétaro, en una amplia cadena impugnativa (ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia emitida el 18 de marzo 2019), tuvo por acreditada la obstaculización del cargo de una Regidora del Ayuntamiento e impuso como medida de apremio al ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia y al ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia del Ayuntamiento multas de \$8,688.00 m.n. y \$2,606.40 m.n., respectivamente, con fundamento en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, que aplicó de manera supletoria, la cual fue revocada por esta Sala Regional y se ordenó aplicar alguna de las señaladas en la Ley de Medios local, sin considerar la relativa a la multa fija.

En la resolución que se revisa (ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia de 23 de octubre de 2020), emitida para cumplir la sentencia de esta Sala en la que se ordenó la emisión de una nueva en la que, sustancialmente, no considerara la imposición de la multa fundamentada en la legislación procesal civil (ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al

<sup>19</sup> Esto es, como todos los principios, su carácter no es absoluto, por el contrario, debe ceder cuando se juzguen actos que entrañen una vulneración manifiesta a disposiciones constitucionales, a principios rectores de la materia electoral o al diseño y funcionamiento del sistema jurídico.

No puede aplicarse cuando se involucren cuestiones de orden público que no sean disponibles para las partes, esto es, aspectos que los tribunales deben acatar y vigilar por su importancia y trascendencia en el orden constitucional y legal, cuya inobservancia no pueden dejar de lado.

Véase, por ejemplo, el criterio sostenido por esta Sala Monterrey en el SM-JDC-283/2019.



final de la sentencia), el Tribunal de Querétaro consideró que no era posible aplicar nuevamente una multa basada en la legislación civil y, en su lugar, determinó que era procedente tomar en cuenta nuevamente el catálogo de medidas de apremio, sanciones o consecuencias jurídicas posibles, y optó por imponer un arresto de 36 horas, al estimar que las múltiples amonestaciones, apercibimientos, llamadas de atención y requerimientos, eran insuficientes para lograr el cumplimiento de sus sentencias.

### 3. Valoración del presente voto diferenciado

3.1. Como se anticipó, considero que debe **revocarse** la sentencia del Tribunal de Querétaro en la parte en la que determinó imponer un arresto de 36 horas al **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** y al **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** del Ayuntamiento, porque dicha determinación rebasa o resulta más grave y trascendental de la multa impuesta en la sentencia previamente emitida por dicho Tribunal Local, **que quedó sin efectos derivado del planteamiento de los impugnantes** y, por ende, sólo autorizaba la emisión de una nueva determinación.

Lo anterior, porque, como se explicó, el deber del Tribunal Local de ponderar, seleccionar e imponer una nueva consecuencia o medida de apremio, sin considerar la multa (por haber sido declarada ilegal), sólo implicaba la autorización jurídica para elegir otra medida que no incluyera otras más gravosas que la multa fija previamente impuesta.

Y, evidentemente, el arresto impuesto en la sentencia impugnada es una consecuencia o medida de apremio más grave y trascendental que la multa impuesta en el juicio previo de la misma cadena impugnativa.

Deber que el Tribunal Local pudo haber observado con relativa facilidad, puesto que entre las medidas de apremio establecidas en la Ley de Medios local había otras menos gravosas distintas a la multa fija, como son: i) apercibimiento, o ii) amonestación.

Sin que obste lo argumentado en cuanto a que el arresto era la medida más idónea, proporcional y eficaz para evitar que el **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** y **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al**

**final de la sentencia** del Ayuntamiento continuaran con su comportamiento antijurídico en contra de la Regidora denunciante.

Esto, porque, en la serie de sentencias previas, el Tribunal Local emitió diversas consideraciones a partir de las cuales concretizó la gravedad y el reproche que consideró adecuado y proporcional para alcanzar el fin buscado, y estas quedaron firmes en su oportunidad.

Además, el deber del Tribunal Local de emitir una nueva sentencia únicamente derivó la necesidad de reparar la violación reclamada por el **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** y el **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** del Ayuntamiento en cuanto a que la medida de apremio de multa fundamentada en el Código de Procedimientos Civiles era indebida, más no para volver a analizar la gravedad de la conducta del **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** y **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** del Ayuntamiento, o la consideración de medidas más gravosas.

32

Esto, precisamente, porque la sentencia de esta Sala que generó la nueva sentencia local impugnada, expresamente ordenó imponer una nueva medida de apremio ***sin variar las conductas infractoras y acreditadas***, lo cual se traduce en mandato para respetar y limitarse a los hechos, la conducta y la falta demostrada, sin autorizar una nueva ponderación.

Ello, aun cuando literalmente no se prohibió al Tribunal Local incrementar la sanción, dado que, bajo la misma lógica que los mandatos del debido proceso, los órganos o tribunales encargados de determinar la imposición de una sanción, deben respetar el principio de no reformar la decisión en perjuicio de los denunciados cuando son los únicos impugnantes.

**3.2.** Incluso, en última instancia, el Tribunal Local, en su carácter de órgano facultado o con deber para verificar la regularidad de la normatividad, pudo emitir una sentencia interpretativa para integrar la porción normativa que establece la multa, de una manera que, conforme a la Constitución, se complementara autorizada<sup>20</sup>, que a manera interpretativa indicativa o bien, un monto menor acorde a las circunstancias, objetivas y subjetivas del caso.

---

<sup>20</sup> Fracción III, del artículo 63, de la Ley de Medios Local, que establece multa de 100 veces el salario mínimo diario vigente en el Estado.  
En caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada





Por tanto, la determinación de arresto debía ser considerada indebida y quedar sin efectos.

**3.3.** En atención a lo anterior, resulta innecesario el estudio de los restantes planteamientos, puesto que éstos se dirigen a cuestionar la legalidad en el proceso, formas y gradación del arresto, sobre la base de que el mismo fuera posiblemente procedente.

Por lo expuesto, lo procedente era **revocar** la sentencia impugnada a fin de que el Tribunal Local emitiera una nueva sentencia, en la que impusiera una nueva medida de apremio al **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia** y al **ELIMINADO: DATO PERSONAL CONFIDENCIAL. Ver fundamento y motivación al final de la sentencia**, de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Medios local, sin considerar la multa fija, ni imponer una más gravosa que ésta.

Con base en lo expresado, me apartado del sentido de la mayoría, y emito el presente **voto diferenciado**.

*Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.*

	31,
	nas
	ia y ción
	.JE- r la r la
	upe rdia